



Asamblea General

Septuagésimo cuarto período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
18 de noviembre de 2019
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la 26ª sesión

Celebrada en la Sede (Nueva York) el jueves 31 de octubre de 2019 a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. Anderberg (Vicepresidenta) (Suecia)

Sumario

Tema 79 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 71^{er} período de sesiones (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, a la Jefatura de la Sección de Gestión de Documentos (dms@un.org), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org/>).

19-18886 (S)



Se ruega reciclar



En ausencia del Sr. Mlynár (Eslovaquia), la Sra. Anderberg (Suecia), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Tema 79 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 71^{er} período de sesiones (continuación) (A/74/10)

1. **La Presidenta** invita a la Sexta Comisión a continuar su examen de los capítulos I a V y XI del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 71^{er} período de sesiones (A/74/10).

2. **El Sr. Abdelaziz** (Egipto) dice que, si bien el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en segunda lectura constituirá una adición importante al marco jurídico internacional, no sería apropiado que la Asamblea General en su actual período de sesiones aprobara una resolución para iniciar la negociación de una convención internacional basada en dicho proyecto de artículos. Se debería conceder tiempo suficiente para que todas las delegaciones puedan estudiar el proyecto de artículos y sus comentarios, que tienen repercusiones en el ámbito constitucional interno de los países, pudiendo variar dichas repercusiones en función de que se trate del sistema de *common law* o del derecho de inspiración romanista.

3. Parece que el párrafo 2 del proyecto de artículo 7 (Establecimiento de la competencia nacional), el proyecto de artículo 9 (Medidas preliminares cuando el presunto infractor se encuentre en el territorio) y el proyecto de artículo 10 (*Aut dedere aut iudicare*) se basan en el principio de la jurisdicción penal universal, sobre el que la Sexta Comisión no ha podido llegar a un consenso. El párrafo 9 del proyecto de artículo 13 (Extradición) se basa en la ficción jurídica de que los delitos abarcados por el proyecto de artículos podrían considerarse, a los efectos de la extradición entre Estados, cometidos no solamente en el lugar del hecho, sino también en el territorio de los Estados que hayan establecido su competencia respecto de tales delitos. En el párrafo 42 del comentario al proyecto de artículo 2 (Definición de crímenes de lesa humanidad), por primera vez la Comisión de Derecho Internacional ha adoptado un enfoque con respecto a la interpretación del término “género” que no se adecua a los términos de referencia acordados y que, en cualquier caso, se debería examinar más bien en la Tercera Comisión. En vista de estas y otras cuestiones, es necesario seguir deliberando

antes de que el proyecto de artículos pueda constituir la base de una convención internacional.

4. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)” y el proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en primera lectura, el orador dice que Egipto acoge con beneplácito que se haya suprimido el proyecto de conclusión 23 propuesto por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/714) (Irrelevancia del cargo oficial y no aplicabilidad de la inmunidad *ratione materiae*), que suscitó preocupación por varios motivos en el anterior período de sesiones de la Asamblea General. La posición de Egipto con respecto al proyecto de conclusión 11 (Divisibilidad de las disposiciones de un tratado que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*)) se mantiene invariable: no debería haber ninguna excepción a la regla de que un tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*) es nulo en su totalidad. De hecho, no está claro en qué situaciones se aplicarían las excepciones propuestas. En el párrafo 2 del proyecto de conclusión 19 (Consecuencias particulares de las violaciones graves de normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)), se dispone que ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por la violación grave por un Estado de una obligación que emane de una norma imperativa. Esta disposición se debería aplicar a todas las violaciones y no solo a las que revistan gravedad.

5. Sería útil considerar cómo y cuándo se puede declarar que ha surgido una nueva norma imperativa y quién puede hacerlo, teniendo presente que la aparición de una norma de esta índole conlleva un proceso acumulativo que puede tardar decenios. Es importante resolver esta cuestión a fin de garantizar la seguridad jurídica; como se indica en el párrafo 2 del proyecto de conclusión 10 (Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*)), las nuevas normas imperativas pueden hacer que los tratados existentes pasen a ser nulos. La cuestión también tiene consecuencias para los medios necesarios para desarrollar y actualizar la lista no exhaustiva que figura en el anexo del proyecto de conclusiones, en el supuesto de que se mantenga dicha lista.

6. Egipto apoya la inclusión del tema “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión, mientras que considera que el tema “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional

humanitario” ya se ha tratado en instrumentos jurídicos que están en vigor. En vista de la considerable carga de trabajo, la Comisión debería centrar su atención en los temas que ahora tiene ante sí, en lugar de añadir nuevos temas a su programa de trabajo actual o a largo plazo. En particular, sería prematuro incluir el tema “Jurisdicción penal universal” en el programa de trabajo.

7. **La Sra. Sekhar** (India), refiriéndose al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)” y al proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, dice que la existencia y la definición de las normas imperativas regionales ha sido objeto de amplio debate por juristas internacionales. En opinión de la India, si bien las normas imperativas pueden verse influidas por la práctica regional de los Estados, la idea de que algunas normas son imperativas se basa precisamente en que son universales en cuanto a su naturaleza y su aplicación. La cuestión de si se pueden considerar imperativas normas que se aplican solo a algunos Estados y no a todos merece un examen detenido.

8. Con respecto a la lista ilustrativa y no exhaustiva de normas imperativas que figura en el anexo del proyecto de conclusiones, la India considera que la Comisión debería actuar con cautela, habida cuenta de que las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) son jerárquicamente superiores a otras normas de derecho internacional y el criterio utilizado para identificarlas debe ser claro e inequívoco. Algunas de las normas que aparecen en la lista no están bien definidas en el derecho internacional y la interpretación de su aplicabilidad varía de un Estado a otro; por consiguiente, habría que seguir debatiendo acerca de las propias normas, así como de la conveniencia de incluir esa lista.

9. En cuanto al tema “Crímenes de lesa humanidad”, la oradora dice que la Comisión ha recomendado que el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado en segunda lectura se utilice como base para que la Asamblea General o una conferencia internacional de plenipotenciarios elabore una convención. Sin embargo, la India considera que debería examinarse con mayor detenimiento la necesidad de una convención dedicada exclusivamente a los crímenes de lesa humanidad, dado que el tema ya está siendo tratado por otros mecanismos y regímenes internacionales, incluida la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye una base jurídica suficiente para la tipificación y el enjuiciamiento a nivel nacional de los crímenes de lesa humanidad.

10. **El Sr. Jiménez Piernas** (España) dice que España apoya la propuesta de elaborar una convención basada en el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado en segunda lectura por la Comisión. Sin embargo, para que sea exitoso y sus resultados sean valiosos, ese impulso debe basarse en un consenso entre los Estados Miembros.

11. España aprecia la labor realizada por la Comisión sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), que es un tema de extraordinaria importancia, ya que, como se indica en el proyecto de conclusión 3 del proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, “las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) reflejan y protegen valores fundamentales de la comunidad internacional, son jerárquicamente superiores a otras normas de derecho internacional y son universalmente aplicables”. La Comisión, con buen criterio, se ha apoyado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en su propia labor sobre otros temas, como la responsabilidad internacional del Estado, las reservas a los tratados y la identificación del derecho internacional consuetudinario, y, en general, en la práctica judicial y convencional internacional y en la doctrina.

12. España entiende que el objetivo del proyecto de conclusiones es limitarse a declarar el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, sobre este tema. En esta dirección, España se muestra conforme con la definición de “norma imperativa” que se propone en el proyecto de conclusión 2, que se basa en el artículo 53 de la Convención de Viena. España también está de acuerdo con los proyectos de conclusión 3 a 9, que contienen criterios para identificar la existencia de normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*). España quiere subrayar que, de conformidad con el proyecto de conclusión 7, párrafo 2, para que exista una norma imperativa se requiere su aceptación y el reconocimiento como tal por una mayoría muy amplia de Estados, lo que significa que no es necesario que todos los Estados la hayan aceptado y reconocido como norma imperativa. Así es como se debe interpretar el artículo 53 de la Convención de Viena, según el cual una norma imperativa es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto.

13. En general, España también está de acuerdo con la lista no exhaustiva de normas imperativas que figura en el anexo del proyecto de conclusiones y es partidaria de incluir en la lista normas que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.

14. Ahora bien, la tercera parte del proyecto de conclusiones (Consecuencias jurídicas de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)) plantea algunos interrogantes a la delegación de España. El párrafo 1 del proyecto de conclusión 14 (Normas de derecho internacional consuetudinario que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*)) debería quizás modificarse, ya que en su actual versión en español resulta al menos confusa. La primera frase se podría redactar del siguiente modo: “En el supuesto de que la práctica internacional permita apreciar el inicio de un proceso de formación de una norma consuetudinaria, no llegará a existir una nueva norma consuetudinaria que sea contraria a una norma imperativa ...”.

15. España se muestra de acuerdo con el proyecto de conclusión 19 (Consecuencias particulares de las violaciones graves de normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)), que está basado en el artículo 41 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Tanto el proyecto de conclusión como el artículo establecen la obligación de cooperar para poner fin a toda violación grave de una norma imperativa, así como la obligación de no reconocer como lícita ni prestar ayuda o asistencia para mantener una situación resultante de la violación grave de una norma imperativa. Sin embargo, el proyecto de conclusión no concreta otras consecuencias de la violación grave de una norma imperativa. El párrafo 4 del proyecto de conclusión se remite a las demás consecuencias que pueda generar la violación grave por un Estado de una norma imperativa según el derecho internacional, sin ninguna otra precisión. En sus comentarios al proyecto de conclusión, la Comisión no aclara, a través del estudio de la práctica de los Estados, cuáles pueden ser tales consecuencias. Se trata de una cuestión muy relevante sobre la que la Comisión debería pronunciarse en este proyecto de conclusiones, tanto por lo que se refiere al cese y la reparación del hecho ilícito resultante de la violación grave de una norma imperativa como por lo que respecta a la aplicación de contramedidas para hacer efectivo ese cese y la reparación.

16. España considera que el proyecto de conclusión 21 (Requisitos de procedimiento) es insuficiente y un tanto indeterminado. Ese proyecto de conclusión está basado en la Convención de Viena de 1969, en la que se regula el procedimiento aplicable en los supuestos de nulidad y terminación de un tratado por ser contrario a una norma imperativa. La redacción del párrafo 1 del proyecto de conclusión resulta muy indeterminada; se limita a establecer que el Estado que invoca una norma imperativa habrá de indicar “la medida que se proponga

adoptar con respecto a la norma de derecho internacional en cuestión”. La Comisión debería concretar qué tipo de medidas se pueden adoptar en tales casos, siempre a la luz de la práctica internacional de los últimos decenios, que brilla por su ausencia en los comentarios. La misma carencia se pone de manifiesto en relación con el proyecto de conclusión 22, en el que simplemente se hace una remisión a las consecuencias que determinadas normas imperativas “puedan generar de otro modo” según el derecho internacional. Asimismo, los dos plazos propuestos por la Comisión en el proyecto de conclusión 21 resultan discutibles y no están debidamente fundamentados en sus comentarios, a saber, el plazo de tres meses, “salvo en casos de especial urgencia”, tras el cual el Estado que haya invocado la norma imperativa como causa de nulidad o terminación de un tratado puede adoptar la medida que ha planteado, si no se ha formulado objeción alguna, y el plazo de 12 meses para resolver la controversia antes de someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia.

17. España considera que la Comisión debería profundizar en este tema, en el marco de su labor de desarrollo progresivo del derecho internacional. Aunque el resultado de la labor sobre este tema sea un proyecto de conclusiones, la Comisión debería aprovechar la ocasión para alentar a todos los Estados a que resuelvan sus diferencias a través de los medios pacíficos de solución de controversias, incluido el recurso al arbitraje internacional y a la Corte Internacional de Justicia. La Comisión debería proponer con claridad y firmeza a los Estados Miembros que cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación de una norma imperativa sea resuelta por un órgano de solución de controversias capaz de resolverla con carácter vinculante, incluida la potestad de dictar medidas provisionales de obligado cumplimiento para las partes.

18. Al igual que en otros temas que examina la Comisión, España es partidaria decidida del desarrollo y la consolidación de las normas terciarias del ordenamiento internacional, dedicadas a los medios de solución de controversias, como la mejor receta para consolidar el estado de derecho en las relaciones internacionales. Ello es especialmente importante en un ámbito como este, que conlleva la determinación de la existencia y las consecuencias jurídicas de las normas imperativas, ya que está en juego la protección de los valores fundamentales de la comunidad internacional.

19. Por último, España respalda la inclusión en el programa de trabajo a largo plazo de los temas “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” y “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de

los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario”. Ambos temas son de gran interés y el tema de la reparación a las víctimas permitiría profundizar en las directrices ya aprobadas por la Asamblea General.

20. **El Sr. Kessel** (Canadá) dice que, en su calidad de creadores del derecho internacional, todos los Estados deberían participar y colaborar con la Comisión para configurar su labor e influir en ella, esté o no en consonancia con sus respectivas posiciones. Los Estados no pueden dejar al mundo académico el desarrollo de la reflexión sobre los temas incluidos en el programa de trabajo de la Comisión; deben prestar a estas cuestiones la atención que merecen, evaluando la labor de la Comisión, formulando observaciones al respecto y, cuando proceda, utilizándola como punto de partida en sus negociaciones. La Comisión también debería examinar la utilidad de producir diferentes tipos de documentos, como directrices y principios, además de los proyectos de artículos, para que los Estados puedan aprovechar plenamente sus conocimientos especializados.

21. En cuanto al tema “Crímenes de lesa humanidad”, al Canadá le complace ver que se suprimió la definición de “género” en el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura. Si bien la definición se tomó directamente del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, desde 1998 ha evolucionado la forma en que la comunidad internacional entiende el “género”. El término “sexo” se utiliza ahora para hacer referencia a los atributos biológicos, mientras que “género” se utiliza más ampliamente para reconocer la variedad de identidades y expresiones de género, que pueden o no estar en consonancia con el género asociado habitual o socialmente al sexo de la persona.

22. El proyecto de artículos presenta otras cuestiones que requerirían un examen más a fondo por parte del Gobierno del Canadá, en caso de que se tomara la decisión de negociar una convención sobre los crímenes de lesa humanidad. Algunas de esas cuestiones se derivan de la misma preocupación expresada con respecto al tratamiento del género. Por ejemplo, habría que revisar la definición de “embarazo forzado” para que incluya a las personas transgénero. El Canadá también considera que la negociación de una convención brindaría la oportunidad de aclarar la definición de “violencia sexual” para que reflejara los recientes debates en el seno de la comunidad internacional. Además, si se entablaran negociaciones, el Canadá querría asegurarse de que los esfuerzos concertados de la Comisión por apoyarse en las

obligaciones internacionales dimanantes de otros instrumentos al preparar el proyecto de artículos no han dado lugar involuntariamente a contradicciones con esos textos.

23. **El Sr. Fintakpa Lamega** (Togo), refiriéndose al tema “Crímenes de lesa humanidad”, dice que el Togo toma nota de que ha cambiado el título del documento elaborado por la Comisión, de “proyecto de artículos sobre los crímenes de lesa humanidad” a “proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad”, que considera que tiene un carácter más expresivo. Puesto que el Gobierno del Togo aún no ha adoptado una posición con respecto a la elaboración de una convención basada en el proyecto de artículos, las observaciones de la delegación del Togo en la coyuntura actual tienen carácter preliminar.

24. Es lamentable que la Comisión haya decidido no incluir una definición del término “género” en el proyecto de artículos basándose en que el género es una construcción social y no biológica, planteamiento que, al parecer, habría sido adoptado por otras autoridades internacionales y por tribunales y cortes internacionales. Sin embargo, habida cuenta de que sus miembros son independientes, la Comisión debería haber adoptado un enfoque diferente. El Togo entiende que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, de conformidad con el Código de la Persona y la Familia del Togo, que no indica ningún otro significado.

25. Los actos considerados crímenes de lesa humanidad se definen y castigan severamente en el Código Penal del Togo, se cometan dentro o fuera del país e independientemente de la nacionalidad del autor o cómplice. Esto refleja el firme respaldo del Togo a uno de los principios fundamentales del derecho penal internacional, a saber, que los Estados tienen la prerrogativa soberana de ejercer su competencia ante sus tribunales respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio o por sus nacionales. Ese principio es compatible con la idea de que el Estado que tiene jurisdicción territorial, por lo general, está en mejor posición para iniciar actuaciones penales y que, en aras de la justicia, tienen precedencia los tribunales locales con claros vínculos jurisdiccionales, tomando debidamente en consideración los intereses de las víctimas y los derechos del acusado.

26. En caso de que el proyecto de artículos sirva de base para una convención, sería necesario incluir garantías que reflejen y promuevan ese principio fundamental. También habría que incorporar garantías adecuadas para impedir que se incoen procedimientos judiciales inapropiados, injustificados o ineficaces en

los que tal vez no se aplicarían las normas procesales estándar. Esas garantías podrían incluir el requisito de que se entablen procedimientos judiciales únicamente con el consentimiento de las autoridades competentes, el establecimiento de un tribunal de última instancia y el respeto del principio de subsidiariedad.

27. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)” y el proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, el Togo apoya el proyecto de conclusión 3, por considerar que las normas imperativas de derecho internacional general reflejan y protegen los valores fundamentales de la comunidad internacional, son jerárquicamente superiores a otras normas del derecho internacional y deberían ser universalmente aplicables. Habría que precisar con claridad en el proyecto de conclusión 16 y su comentario que incluso las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad deben estar en consonancia con las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*).

28. El Togo está de acuerdo con el Relator Especial en que el adjetivo “grave” se debería suprimir del proyecto de conclusión 19, ya que los Estados están obligados a cooperar para poner fin, por medios lícitos, a todo incumplimiento grave por parte de un Estado de una obligación dimanante de una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*), con independencia de que ese incumplimiento sea “grave” o no. El Togo apoya el proyecto de conclusión 23 y la lista no exhaustiva de normas imperativas cuyo carácter imperativo ha sido reconocido anteriormente por la Comisión.

29. Habida cuenta de que, como se indica en el anexo B del informe de la Comisión (A/74/10), “desde principios del siglo XX han existido distintos tipos de foros, tanto nacionales como internacionales, que se han ocupado de las violaciones de los derechos de las personas”, el Togo se pregunta sobre el alcance del nuevo tema añadido al programa de trabajo a largo plazo, a saber, “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario”. En un momento en que varios documentos conexos de la Comisión de Derecho Internacional siguen siendo objeto de examen en la Sexta Comisión, incluidos los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el Togo duda de que el tema propuesto responda a las necesidades de los Estados respecto del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.

30. Sin embargo, en su calidad de Estado ribereño, el Togo considera que la piratería marítima es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional en su conjunto, ya que los actos de piratería se cometen en todas las zonas marítimas y afectan, en distinta medida, a los intereses de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. Por lo tanto, a la luz de su relevancia, el tema “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” cumple los criterios para ser incluido en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión y el Togo espera que se traslade al programa de trabajo actual lo antes posible.

31. El Sr. Azimov (Uzbekistán) dice que el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura podría facilitar la aprobación y armonización de la legislación nacional a ese respecto, allanando así el camino para una cooperación más eficaz entre los Estados en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos.

32. Sin embargo, Uzbekistán no puede apoyar el enfoque de la Comisión respecto de la definición de “género” indicada en el párrafo 41 de su comentario al proyecto de artículo 2 (Definición de crímenes de lesa humanidad). Habida cuenta del carácter delicado de la cuestión, sería aconsejable mantener el texto convenido internacionalmente y consagrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además, ninguna de las fuentes citadas en el comentario para apoyar lo que se entiende actualmente por “género” refleja la posición colectiva de los Estados, que son los principales sujetos del derecho internacional.

33. El proyecto de artículo 5 es una disposición importante en el sentido de que reafirma el principio universal y arraigado de no devolución. Uzbekistán también acoge con beneplácito la ampliación de las disposiciones sobre asistencia judicial recíproca: teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad a menudo trascienden las fronteras, el respeto del principio de la inevitabilidad del castigo puede depender de que los Estados cooperen eficazmente. Uzbekistán también acoge con beneplácito la aclaración hecha en el párrafo 31 del comentario al proyecto de artículo 6 (Criminalización en el derecho interno) en el sentido de que el párrafo 5 del proyecto de artículo no afecta a ninguna inmunidad procesal de la que un funcionario del Estado extranjero pueda gozar ante una jurisdicción penal nacional, dado que esas inmunidades siguen rigiéndose por el derecho internacional convencional y consuetudinario.

34. En cuanto al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) y el proyecto

de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, el orador dice que es necesario precisar la frase “una mayoría muy amplia de Estados” que figura en el párrafo 2 del proyecto de conclusión 7 (Comunidad internacional de Estados en su conjunto), aunque sea en el comentario al proyecto de conclusión, ya que no hay criterios establecidos para determinar cuándo se ha alcanzado ese umbral y esto, a su vez, podría dar lugar a distintas interpretaciones de la frase en la aplicación del derecho internacional por parte de los órganos pertinentes. Por consiguiente, Uzbekistán solicita a la Comisión que proporcione algunos criterios que faciliten una mayor convergencia de los enfoques adoptados por los Estados y los órganos internacionales.

35. Es necesario un estudio detenido de cada una de las normas incluidas en la lista no exhaustiva que figura como anexo del proyecto de conclusiones para confirmar que efectivamente constituyen normas de (*ius cogens*), sobre todo a la luz de la práctica general de los Estados. Uzbekistán acoge con beneplácito que se haya suprimido el proyecto de conclusión 23 (Irrelevancia del cargo oficial y no aplicabilidad de la inmunidad *ratione materiae*) del proyecto de conclusiones propuesto por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/714). Uzbekistán propuso ese cambio porque la inmunidad de los funcionarios del Estado ya es objeto de un estudio separado por parte de la Comisión y no es necesario duplicar ese trabajo.

36. El resultado de la labor sobre las normas de (*ius cogens*) garantizará la seguridad jurídica en relación con la jerarquía de las normas de derecho internacional. También puede resultar útil para los órganos que aplican el derecho internacional.

37. Por último, con respecto a los nuevos temas propuestos para su inclusión en el programa de trabajo de la Comisión, el orador dice que la excesiva ampliación del número de temas estudiados por la Comisión podría tener un efecto negativo sobre la eficacia de su labor.

38. El Sr. Hamamoto (Japón) dice que los documentos que elabora la Comisión como resultado del estudio de los temas se han hecho voluminosos. Habida cuenta de que los Estados y los tribunales internacionales se refieren a la labor de la Comisión cuando interpretan el derecho internacional, es importante que los Estados tengan la oportunidad de examinarla a fondo, lo que no ocurre necesariamente en la actualidad. Además, los documentos de la Comisión están tomando cada vez más la forma de proyectos de conclusiones o proyectos de directrices, que, a diferencia de los proyectos de artículos, que pueden

constituir la base de tratados, no son objeto de negociaciones diplomáticas.

39. El objetivo de la Comisión de Derecho Internacional es el desarrollo progresivo del derecho internacional, por un lado, y su codificación, por otro. La Sexta Comisión debería tener en cuenta esa distinción cuando se debate acerca de la labor de la Comisión de Derecho Internacional.

40. Puesto que esa labor y las deliberaciones en la Sexta Comisión conducirán en última instancia a la unificación de las normas internacionales, esos documentos deberían seguir estando ampliamente reflejados en la práctica de los Estados. Sin embargo, un Estado puede apartarse de una norma unificada mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Si no se admite ese acuerdo en contrario, los Estados podrían dudar en adherirse a tratados de codificación y tener dificultades para adaptar los tratados a la evolución posterior en la comunidad internacional. Esto se aplica, por ejemplo, a los tratados en la esfera de las relaciones consulares. Los instrumentos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional y aprobados por los Estados deberían ser lo suficientemente flexibles como para permitir que los Estados modifiquen sus derechos y obligaciones concertando otros tratados bilateralmente o con un número limitado de partes, si fuera necesario.

41. La Comisión de Derecho Internacional ultimaré su labor sobre muchos temas antes de 2021 y debería tenerse en cuenta qué temas podría ser útil que examine en el futuro. No obstante, los Estados también necesitan tiempo para asimilar la importante labor de la Comisión. El Japón se opone a que se incluyan en el programa de trabajo a largo plazo los temas “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario” y “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” debido a que la Comisión ya ha examinado o está examinando muchos otros temas. Sin embargo, el Japón acoge con beneplácito la inclusión del tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional” en el programa de trabajo y agradece que la Comisión haya respondido rápidamente a las solicitudes de los Estados Miembros en ese sentido. La inclusión del tema “La prueba ante las cortes y tribunales internacionales” en el programa de trabajo podría resultar útil para los Estados Miembros.

42. En cuanto al tema “Crímenes de lesa humanidad”, el orador dice que el Japón considera que el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión

en segunda lectura es el resultado de una labor de carácter legislativo destinada a elaborar un tratado y no es la codificación del derecho vigente. Para que el proyecto de artículos sea aprobado como un tratado y reciba un amplio apoyo de los Estados, hay que tener en cuenta las legislaciones penales nacionales. Es el caso del proyecto de artículo 2, que contiene una definición de crímenes de lesa humanidad, así como del proyecto de artículo 6 (Criminalización en el derecho interno). El párrafo 1 del proyecto de artículo 6 obliga a los Estados a tipificar esos actos como delito en su derecho interno, lo cual podría plantear algunas dificultades técnicas, por lo que beneficiaría a los Estados que se concediera cierto margen de discrecionalidad con respecto al proceso de tipificación. En los párrafos 2 y 3 se establece que los Estados deben cerciorarse de que no solo es punible en su derecho penal interno la comisión de crímenes de lesa humanidad, sino también la de otro tipo de actos delictivos. Puesto que los Estados cuentan con diferentes disposiciones relativas a las modalidades de responsabilidad penal, se les debería permitir cierto margen de discrecionalidad a ese respecto.

43. El párrafo 5 establece que el cargo oficial de una persona no es motivo para eximirla de responsabilidad penal. Si bien el Japón toma nota de que en el comentario al proyecto de artículo 6 la Comisión hace una distinción entre la responsabilidad penal y la inmunidad de jurisdicción penal extranjera, se muestra preocupado por la posible confusión en la práctica. De conformidad con el párrafo 6 del proyecto de artículo, los Estados deben asegurarse de que los crímenes de lesa humanidad no prescriban. Los crímenes de lesa humanidad incluyen varios tipos de conducta y pueden estar castigados con una gama de penas en función de la conducta en cuestión y el modo de responsabilidad penal. Por tanto, la aplicación de ese párrafo puede plantear dificultades.

44. En el párrafo 8 se establece la responsabilidad de las personas jurídicas y otorga a los Estados facultades discrecionales con respecto a la legislación nacional. Sin embargo, como se indica en el comentario al proyecto de artículo 6, “la responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha ocupado hasta el momento un lugar especialmente destacado en las cortes y tribunales penales internacionales”. La definición de “persona jurídica” también puede ser controvertida. Debe procurarse evitar una situación en la que una empresa se encuentre en dificultades debido a que tiene una relación remota con el capital de otra empresa que existió hace decenios.

45. El tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)” es importante para todos los Estados. Sin embargo, solo se dispuso de todos

los comentarios una vez finalizada la primera lectura del proyecto de conclusiones sobre el tema. Los Estados deberían poder examinar minuciosamente la labor de la Comisión.

46. El Relator Especial propuso inicialmente el proyecto de conclusión 22, relativo al deber de ejercer la jurisdicción nacional respecto de crímenes prohibidos por normas imperativas de derecho internacional general, y el proyecto de conclusión 23, relativo a la irrelevancia del cargo oficial y la no aplicabilidad de la inmunidad *ratione materiae*. Sin embargo, la Comisión ha decidido sabiamente aprobar solo un nuevo proyecto de conclusión 22, titulado “Sin perjuicio de las consecuencias que determinadas normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) puedan generar de otro modo”, teniendo en cuenta que el alcance del tema se limita a la identificación y las consecuencias jurídicas del *ius cogens*.

47. El proyecto de conclusión 8 (Prueba de la aceptación y el reconocimiento) es muy similar al proyecto de conclusión 10 de las conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario. Es cuestionable que puedan utilizarse las mismas pruebas para identificar tanto el derecho internacional general como el *ius cogens*.

48. Por último, la Comisión ha aprobado una lista no exhaustiva de normas imperativas que figura como anexo del proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*). Sería útil que la lista estuviese acompañada de los motivos y las pruebas. La lista contiene normas reconocidas anteriormente por la Comisión como normas imperativas, pero es discutible que exista un consenso entre los Estados con respecto a que las normas enumeradas gocen de un estatuto diferente al de otras normas. El Japón considera conveniente que, para evitar controversias, se suprima la lista en segunda lectura.

49. **La Sra. Le Duc Hanh** (Viet Nam) dice que la Asamblea General y la Sexta Comisión deberían examinar detenidamente la necesidad de una convención sobre los crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de Viet Nam respalda que se repriman y castiguen los crímenes de lesa humanidad, teniendo presente el respeto de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. No obstante, Viet Nam no está convencido de que exista un consenso acerca de una convención internacional, habida cuenta de que el análisis de la Comisión de Derecho Internacional se basa en la práctica de la Corte Penal Internacional, que no goza de un amplio consenso en la comunidad internacional con respecto a la

investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves.

50. Para resolver las diferencias entre los sistemas nacionales de derecho penal, los Estados deberían tener la posibilidad de formular reservas a cualquier convención futura, siempre que dichas reservas no contravengan su objeto y su fin. Las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de la convención deberían someterse a la Corte Internacional de Justicia solo con el consentimiento de las partes y no de manera unilateral. Además, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha logrado aún amplia aceptación en el derecho internacional y, por tanto, la cuestión de las sanciones por los actos de las personas jurídicas debería regularse en el derecho interno de los Estados y eliminarse del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura.

51. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, la oradora dice que las normas imperativas desempeñan un papel importante en el derecho internacional. Dichas normas fueron reconocidas en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y en la legislación interna y la doctrina jurídica de muchos Estados. La Ley de Tratados de Viet Nam reconoce que las normas imperativas son un principio que debe respetarse al negociar y celebrar tratados internacionales. Sin embargo, la identificación de esas normas sigue siendo poco clara. Viet Nam encomia los esfuerzos de la Comisión por abordar la cuestión y la alienta a que prosiga su investigación sobre el tema.

52. Con respecto a las disposiciones sobre la aceptación y el reconocimiento de las normas de *ius cogens* que figuran en el proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) aprobado por la Comisión en primera lectura, la oradora dice que a los Estados con recursos limitados les puede resultar imposible participar plenamente en la elaboración de materiales que sirvan como prueba de esa aceptación y reconocimiento. Por consiguiente, la noción de “una mayoría muy amplia de Estados” que aparece en esas disposiciones debería interpretarse con cautela a fin de asegurar que la comunidad de Estados en su conjunto esté representada en la aceptación y el reconocimiento del *ius cogens*.

53. Viet Nam toma nota de que el Relator Especial ha logrado elaborar una lista no exhaustiva de normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), que figura en el anexo del proyecto de conclusiones. Sin embargo, se ha expresado

preocupación por que algunos principios no incluidos en la lista no se puedan considerar *ius cogens* a pesar de su aceptación y reconocimiento internacional como principios generales del derecho y como normas que no admiten acuerdo en contrario. Entre ellos se encuentran los siete principios codificados en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que figura como anexo de la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General.

54. Por último, Viet Nam tiene la determinación de promover el estado de derecho en el plano internacional sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional, en particular los consagrados en la Carta, incluido el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el arreglo pacífico de las controversias.

55. **La Sra. Jang Ju Yeong** (República de Corea) dice que la República de Corea apoya el contenido general del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura, que podría servir de base para fortalecer la cooperación en materia de cumplimiento de la ley entre los Estados, en particular en ausencia de tratados bilaterales de extradición o asistencia judicial recíproca.

56. Sin embargo, para mantener la coherencia y la estabilidad en el sistema de justicia internacional, el proyecto de artículos debería armonizarse todo lo posible con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si bien la Comisión se ha esforzado por tener en cuenta el carácter evolutivo de la aplicación de la ley a nivel nacional y la cooperación internacional, debería velar por que el proyecto de artículos fortalezca el sistema previsto en el Estatuto de Roma en lugar de menoscarlo. La Comisión también debería examinar detenidamente la relación entre el proyecto de artículos y otros instrumentos internacionales pertinentes, como la iniciativa de un nuevo tratado multilateral sobre asistencia judicial recíproca y extradición para el enjuiciamiento en el plano nacional de los crímenes internacionales más graves.

57. Los proyectos de artículo relativos a la competencia, la extradición, la no devolución, las víctimas y los testigos y la asistencia judicial recíproca deberían adecuarse estrechamente a las normas establecidas en virtud de los tratados vigentes. El proyecto de artículo relativo al principio *aut dedere aut iudicare* debería seguir la fórmula de La Haya, en la que se han basado ya muchos tratados.

58. Si bien la República de Corea está de acuerdo en principio con la recomendación de que la Asamblea General o una conferencia diplomática elabore una convención basada en el proyecto de artículos, considera que es necesario que los Estados prosigan con sus deliberaciones acerca de los métodos y procedimientos de consulta y que se escuchen plenamente las opiniones de los Estados durante esos debates.

59. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)” y el proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, la República de Corea entiende que se celebraron muchos debates acerca de si la Comisión debía proporcionar una lista ilustrativa de normas imperativas y, de ser así, cómo debía hacerse. Como solución de compromiso, la Comisión decidió señalar en un anexo las normas imperativas que ya había reconocido como tales. Sin embargo, es necesario seguir deliberando sobre la cuestión de si la lista ilustrativa debería figurar en el proyecto de conclusiones. La República de Corea insta a la Comisión a que adopte un enfoque prudente y vuelva a examinar el tema en segunda lectura.

60. El tema “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario” podría resultar útil para determinar la práctica de los Estados en relación con esas reparaciones, mientras que el tema “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” tiene importantes repercusiones para las naciones marítimas. El Gobierno de la República de Corea espera que la labor sobre ese tema aclare en última instancia cómo hacer frente a la piratería y el robo a mano armada en el mar en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y aporte información práctica sobre su aplicación por parte de los Estados.

61. Por último, dado que el principal propósito de la Comisión es el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, debería tratar de reflejar más plenamente las opiniones de los Estados al examinar los temas.

62. **El Sr. Sarvarian** (Armenia), aludiendo al tema “Crímenes de lesa humanidad” y al proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión, dice que es preciso abordar la cuestión de la prioridad de la competencia en lo que respecta a los tres tipos de competencia que se establecen en el proyecto de artículo 7, párrafo 1, a saber, la competencia territorial, la competencia en razón de la personalidad activa y la competencia en razón de la

personalidad pasiva. Hay distintos argumentos a favor de dar prioridad a una u otra, pero es importante garantizar la claridad jurídica, sobre todo dado que un número considerable de Estados Miembros son parte en otros regímenes convencionales que contienen obligaciones relativas a la entrega de sospechosos de crímenes de lesa humanidad. La posibilidad de que la actual versión del proyecto de artículos dé lugar a conflictos de competencia no se elimina con la adición del proyecto de artículo 13, párrafo 12, que establece que el Estado en que se encuentre el presunto infractor “tomará debidamente en consideración” la solicitud del Estado en el territorio bajo cuya jurisdicción se haya cometido el presunto delito, un problema que se ve agravado por la fragilidad del mecanismo para el arreglo de controversias que se propone en el proyecto de artículo 15.

63. Armenia está a favor de celebrar una conferencia diplomática para negociar una futura convención basada en el proyecto de artículos, en lugar de que la Asamblea General apruebe este de inmediato. En vista de las preocupaciones sustantivas que la delegación de Armenia plantea, que se exponen en extenso en su declaración escrita disponible en el portal PaperSmart, la conferencia debería celebrarse en un plazo de entre tres y cinco años, con el fin de dar a los Estados la oportunidad de estudiar el proyecto de artículos y de formular sus posiciones.

64. Armenia considera útil el tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, que se refiere a una esfera fundamental del derecho internacional general. Sin embargo, sigue abrigando algunas inquietudes. En lo tocante al proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, el orador dice que en el proyecto de conclusión 4, los criterios para la identificación de una “supernorma consuetudinaria” o norma imperativa se basan claramente en el derecho positivo (*ius dispositivum*). Armenia preferiría que se basaran en el derecho natural (*ius naturale*), con una referencia al proyecto de conclusión 3 y al comentario a ese proyecto de conclusión y la jurisprudencia en él citada, como la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las *Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, en la que la Corte se refirió al “carácter universal de la condena del genocidio”. En la doctrina se citan como normas de *ius cogens* tanto la práctica de los Estados como consideraciones de índole moral, lo que resulta bastante desconcertante. Armenia no está de acuerdo con la idea de que el consentimiento de los Estados ha sido históricamente necesario para el reconocimiento de una norma de *ius cogens*.

65. Teniendo esto en cuenta, sería conveniente que la Comisión continuara examinando cómo pueden identificarse las normas de *ius cogens* sobre la base del derecho natural, así como qué grado de aceptación por la comunidad internacional en su conjunto o universalidad es necesario para su identificación. También sería de utilidad que la Comisión examinara la cuestión de la relación entre una norma imperativa de carácter sustantivo y una norma positiva de carácter procesal, aunque parece que la Corte Internacional de Justicia se pronunció de forma definitiva al respecto en la causa relativa a las *Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania c. Italia: intervención de Grecia)*.

66. La delegación de Armenia también pone en duda que sea posible cuantificar la aceptación por “una mayoría muy amplia de Estados” (proyecto de conclusión 7, párrafo 2). Para eso, sería preferible que la Comisión utilizara la frase “aceptación total”, dado que la diferencia entre ambas es tan pequeña que resulta insignificante.

67. En los proyectos de conclusión 8 (Prueba de la aceptación y el reconocimiento) y 9 (Medios auxiliares de determinación del carácter imperativo de las normas de derecho internacional general), el término “medios auxiliares” invierte el proceso por el que se han reconocido normas imperativas en la práctica. Han sido los tribunales, y no los Estados, quienes han liderado este proceso, como ha hecho la propia Comisión, por ejemplo, en el caso de los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena de 1969.

68. Armenia respalda la fusión de los conceptos de *ius cogens* y *erga omnes* en el proyecto de conclusión 17. Son las dos caras de una misma moneda y, sin embargo, se dedica mucho tiempo y esfuerzo a debatir su relación teórica.

69. La lista no exhaustiva de normas imperativas incluida en el anexo del proyecto de conclusiones adolece de algunos problemas metodológicos. El derecho a la libre determinación figura en la lista, pero una pequeña minoría de Estados cuestiona su carácter de norma imperativa. En su opinión consultiva relativa a las *Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, la Corte Internacional de Justicia afirmó que el derecho a la libre determinación tiene carácter *erga omnes*, pero no abordó la cuestión de su carácter imperativo, quizás debido, en parte, a las cuestiones pendientes con relación a la identificación de las normas imperativas, especialmente teniendo en consideración los períodos históricos que se examinaron en ese procedimiento. Sin embargo, unos 62 Estados han defendido expresamente

el rango imperativo de ese derecho en sus alegaciones, y ningún Estado lo ha negado expresamente.

70. Aunque Armenia considera que el derecho a la libre determinación tiene carácter tanto consuetudinario como imperativo, coincide con los Estados que han criticado la lista por su falta de coherencia metodológica. Si se hubiera aplicado el estricto enfoque de “supernorma consuetudinaria” de la Comisión, las normas imperativas de la lista no habrían sido reconocidas como tales en el momento en que se produjo su reconocimiento histórico. Sin embargo, Armenia considera que ese reconocimiento histórico se basa en normas morales, y no en la práctica de los Estados. La tarea de la Comisión es determinar una base metodológica a este respecto.

71. **El Sr. Sunel** (Turquía), refiriéndose al tema “Crímenes de lesa humanidad” y al proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura, dice que la delegación de Turquía necesita más tiempo para examinar la recomendación de la Comisión de que la Asamblea General o una conferencia internacional de plenipotenciarios elabore una convención sobre la base de dicho proyecto.

72. En cuanto al proyecto de artículos en sí mismo, el orador señala que el Estatuto de Roma dispone que el crimen de genocidio es cometido por “personas”. De igual modo, el artículo IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio establece que solo las personas pueden cometer genocidio o cualquiera de los otros actos prohibidos por la Convención. No obstante, según el proyecto de artículo 3, párrafo 1, todo “Estado” tiene la obligación de no cometer actos que constituyan crímenes de lesa humanidad. Si los Estados no pueden ser autores del crimen de genocidio, tampoco pueden serlo de crímenes de lesa humanidad. El comentario al proyecto de artículo 3 no es suficiente ni convincente, y ese párrafo debe suprimirse. Por otra parte, Turquía considera que debe incluirse en el proyecto de artículos una referencia al principio de no retroactividad, en consonancia con las normas aplicables de derecho internacional.

73. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, Turquía continúa teniendo dudas sobre la necesidad de un desarrollo progresivo del concepto de *ius cogens*, puesto que la práctica y la jurisprudencia son insuficientes y todavía no se han establecido normas de derecho internacional claras y concretas sobre este tema. A Turquía le preocupa también la lista no exhaustiva de normas imperativas recogida en el anexo del proyecto

de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura.

74. En lo que se refiere al tema “Aplicación provisional de los tratados”, el orador señala que Turquía concede importancia al consentimiento de los Estados y las organizaciones internacionales en lo relativo a la aplicación provisional y desea reiterar que las normas no deberían crear obligaciones jurídicamente vinculantes.

75. La delegación de Turquía tiene algunas inquietudes sobre el alcance del tema “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario” propuesto para su inclusión en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión, ya que la práctica y la jurisprudencia sobre violaciones graves del derecho internacional humanitario son insuficientes. Asimismo, dada la situación actual del entorno multilateral, es muy poco probable que se logre un consenso, especialmente sobre determinados aspectos de índole política del tema. La Comisión, por tanto, debería adoptar un enfoque prudente y equilibrado. En cambio, su trabajo sobre el tema “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” podría ser de gran utilidad.

76. En la declaración escrita del orador, que se puede consultar en el portal PaperSmart, se incluyen observaciones más detalladas que reflejan la posición de su delegación.

77. **La Sra. Veski** (Estonia) dice que Estonia acoge con satisfacción la aprobación por parte de la Comisión del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, así como el proceso transparente e inclusivo que la Comisión ha seguido para su elaboración, contando con la colaboración de Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros interesados.

78. A Estonia le complace que el proyecto de artículos refleje la evolución reciente del derecho internacional. A ese respecto, Estonia acoge con agrado las numerosas referencias al derecho internacional aplicable recogidas en el proyecto de preámbulo, incluida la afirmación de que la prohibición de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*). También se congratula de la decisión de suprimir la definición de “género” en el proyecto de artículo 2, en consonancia con los principios de derechos humanos e igualdad de trato, y de incluir, en el párrafo 8 del proyecto de artículo 6, una disposición que obliga a los Estados a adoptar disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los crímenes de lesa humanidad.

79. La delegación de Estonia apoya la recomendación de que la Asamblea General o una conferencia internacional de plenipotenciarios elabore una convención sobre la base del proyecto de artículos. Esa convención colmaría la laguna que existe actualmente en el derecho internacional y reforzaría el sistema internacional de derecho penal complementando a los tratados internacionales pertinentes en materia de genocidio y crímenes de guerra. Aunque la delegación de Estonia es flexible en cuanto a la elección del foro para la elaboración de la convención, preferiría que fuera una conferencia internacional.

80. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, la oradora dice que Estonia apoya el proyecto de conclusión 3, en el que la Comisión afirma, muy acertadamente, que las normas de *ius cogens* protegen valores fundamentales de la comunidad internacional. En el párrafo 2 de su comentario al proyecto de conclusión 4, la Comisión intenta explicar a qué se refiere cuando dice que para que una norma pueda considerarse una norma imperativa de derecho internacional general, “es necesario establecer” que la norma en cuestión cumple los criterios que ha fijado a tal efecto. Sin embargo, la expresión “es necesario establecer” sigue siendo bastante ambigua; la Comisión podría tener que aclararla o proporcionar ejemplos basados en la jurisprudencia o la práctica de los Estados.

81. Aunque Estonia apoya el proyecto de conclusión 6, en el que se establece una distinción entre la aceptación y el reconocimiento como criterio para identificar una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*) y la aceptación y el reconocimiento como norma de derecho internacional general, las palabras “(*opinio iuris*)” deberían añadirse al final del párrafo 1 para que la distinción quede más clara. En el párrafo 6 de su comentario al proyecto de conclusión 7, la Comisión señala que “la comunidad internacional de Estados” debe entenderse como “una mayoría abrumadora de Estados”, “casi todos los Estados”, “prácticamente todos los Estados” o “toda la comunidad internacional de Estados en su conjunto”. Tal afirmación debería estar respaldada por ejemplos adicionales procedentes de la jurisprudencia internacional.

82. Estonia acoge con satisfacción las versiones revisadas de los proyectos de conclusión 10 y 11, que consolidan las consecuencias jurídicas de la legalidad de los tratados y las consecuencias para las partes si un tratado o alguna de sus disposiciones está en oposición con una norma de *ius cogens*. Sin embargo, es importante analizar los efectos de los proyectos de conclusión no solo para los Estados, sino también para

las organizaciones internacionales. A Estonia le complace que el texto del proyecto de conclusión 12 se extrajera del artículo 71 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

83. Estonia acoge con agrado las modificaciones introducidas en el proyecto de conclusión 14, párrafo 1, así como el análisis recogido en el párrafo 5 del comentario a dicho proyecto de conclusión, que reflejan la sugerencia formulada anteriormente de que la Comisión continúe analizando el derecho internacional consuetudinario como principal base para la aparición de una norma de *ius cogens*. Sin embargo, la Comisión no ha dado respuesta, en su comentario, a las sugerencias relativas a la afirmación de que los elementos necesarios para el desarrollo del derecho internacional consuetudinario –la práctica de los Estados y la *opinio iuris*– no pueden dar lugar a una norma de *ius cogens*. A Estonia le complace que la Comisión distinga claramente entre normas de *ius cogens* y obligaciones *erga omnes* en los párrafos 2 y 3 de su comentario al proyecto de conclusión 17, donde indica que, aunque todas las normas imperativas de derecho internacional general generan obligaciones *erga omnes*, no todas las obligaciones *erga omnes* emanan de normas imperativas de derecho internacional general.

84. Estonia apoya el proyecto de conclusión 21 (Requisitos de procedimiento), que se ha redactado en consonancia con los artículos 65 y 67 de la Convención de Viena. Sin embargo, la Comisión debería abordar con cautela la cuestión de los requisitos de procedimiento, porque, como reconoce en el párrafo 4 de su comentario al proyecto de conclusión, ha de asegurarse de que no pretendan imponer normas convencionales a los Estados que no estén obligados por esas normas y, al mismo tiempo, de que se tengan en cuenta las preocupaciones relativas a la necesidad de evitar la anulación unilateral de normas. La delegación de Estonia se congratula de que se haya incluido en un anexo una lista no exhaustiva de normas a las que la Comisión se ha referido anteriormente como normas de carácter imperativo, que será de vital importancia para los debates futuros sobre el *ius cogens* y para la evaluación de los avances que se produzcan en el derecho internacional.

85. Estonia acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de incluir en su programa de trabajo a largo plazo los temas “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario” y “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar”, ya que ambos cumplen las condiciones para la selección de temas nuevos para el programa de trabajo a largo plazo.

86. **La Sra. Rush** (Nueva Zelandia) dice que Nueva Zelandia acoge con agrado la decisión de la Comisión de incluir el tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional” en su programa de trabajo actual y de crear un Grupo de Estudio. Esta decisión ha recibido un apoyo importante, y la delegación de Nueva Zelandia se alegra de que la Comisión haya dado respuesta a los llamamientos de los Estados Miembros a tal efecto. El aumento del nivel del mar es una preocupación acuciante para la comunidad internacional, con consecuencias jurídicas complejas.

87. A Nueva Zelandia le inquietan las repercusiones de la subida del nivel del mar para las zonas marítimas delimitadas con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se ha comprometido a colaborar con asociados para garantizar que, ante los cambios en el litoral, se protejan las zonas marítimas de los Estados ribereños. A este respecto, la delegación de Nueva Zelandia observa con satisfacción que se espera que el Grupo de Estudio comience a examinar el subtema “Cuestiones relacionadas con el derecho del mar” en 2020.

88. La elevación del nivel del mar es una cuestión que afecta de cerca a Nueva Zelandia y a sus vecinos de las islas del Pacífico, algunos de los cuales están experimentando un aumento del nivel del mar nueve veces superior al promedio mundial. Las zonas marítimas son de vital importancia para los países del Pacífico. Para muchos, sus espacios marítimos y los derechos derivados de la Convención sobre el Derecho del Mar constituyen su camino hacia el desarrollo sostenible. Sería injusto que estos países vieran socavados sus derechos sobre las zonas marítimas por un fenómeno al que han contribuido poco y del que nada sabían los redactores de la Convención. En una reunión del Foro de las Islas del Pacífico celebrada en agosto de 2019, los líderes del Foro se comprometieron a realizar un esfuerzo colectivo, incluso desarrollando el derecho internacional, para garantizar que, una vez que las zonas marítimas de un Estado miembro del Foro se hayan delimitado de conformidad con la Convención, no puedan ponerse en cuestión o reducirse como consecuencia del aumento del nivel del mar y del cambio climático.

89. Las consecuencias jurídicas del aumento del nivel del mar plantean cuestiones de importancia mundial. A todos los Estados les interesa mantener el equilibrio de derechos y responsabilidades que establece la Convención. También les conviene garantizar la certidumbre sobre las zonas marítimas, con el fin de evitar posibles controversias. Estas cuestiones merecen un concienzudo examen por parte de la comunidad internacional.

90. En cuanto al tema “Crímenes de lesa humanidad”, la oradora dice que a su delegación le complace que la Comisión haya decidido recomendar a la Asamblea General el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Nueva Zelandia acoge con satisfacción que la obligación de los Estados de no cometer actos que constituyan crímenes de lesa humanidad se haya recogido de forma explícita en el proyecto de artículo 3; esa claridad no deja lugar a dudas ni confusiones.

91. La eliminación de la definición de “género” en el proyecto de artículo 2 es un avance positivo que refleja la existencia de diversos conceptos de identidad de género en las distintas partes del mundo. La supresión evita también el riesgo de que una definición de ese tipo entre en contradicción con el derecho nacional de los Estados. La elaboración de una convención basada en el proyecto de artículos completaría la codificación de los crímenes más graves de trascendencia internacional.

92. En cuanto al tema “Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados”, y en respuesta a la solicitud de información sobre la práctica de los Estados formulada por la Comisión, la oradora señala que en Nueva Zelandia, los ataques al medio natural están prohibidos en el Manual de Derecho Militar. Las obligaciones por las que Nueva Zelandia se rige en caso de conflicto armado internacional se aplican también a los conflictos armados no internacionales, incluida la prohibición de usar métodos o medios de hacer la guerra que tengan por objeto causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, o que cabría esperar que tengan ese resultado.

93. **La Sra. Cerrato** (Honduras) dice que a Honduras le satisface que la Comisión haya aprobado en primera lectura el proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) y el proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Honduras también acoge con agrado la aprobación en segunda lectura del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad y respalda la recomendación de la Comisión para que la Asamblea General o una conferencia internacional de plenipotenciarios elabore una convención sobre la base de dicho proyecto de artículos. Esa convención complementaría el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. El nuevo Código Penal de Honduras contempla los delitos contra la comunidad internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, y establece la competencia ultraterritorial respecto de dichos delitos.

94. En cuanto al tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional”, la oradora señala que Honduras acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de incluirlo en su programa de trabajo y de crear un Grupo de Estudio. Honduras elogia el hecho de que el Grupo de Estudio celebró una reunión, en la que convino en su composición, sus métodos de trabajo y su propuesta de calendario y de programa de trabajo, tomando como base los tres subtemas identificados en la sinopsis.

95. Como país costero con territorio insular en desarrollo, Honduras es especialmente vulnerable al cambio climático. La cuestión de la subida del nivel del mar es crucial para la supervivencia de sus poblaciones costeras e insulares. El tema debería estudiarse en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de París relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros instrumentos pertinentes en el marco del derecho ambiental, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

96. Honduras acoge con agrado la decisión de la Comisión de incluir en su programa de trabajo a largo plazo los siguientes temas: “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario” y “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar”.

97. Se pueden encontrar observaciones más detalladas sobre estas cuestiones en la exposición escrita de la delegación de Honduras, que se encuentra en el portal PaperSmart.

98. **La Sra. Heyvaert** (Bélgica) dice que Bélgica acoge con satisfacción la aprobación por parte de la Comisión del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Bélgica considera muy importante acabar con la impunidad de los delitos más graves de trascendencia internacional y apoya la elaboración de una convención basada en el proyecto de artículos, como recomienda la Comisión. A Bélgica le satisface que la definición de “género” del artículo 7 del Estatuto de Roma no se haya mantenido en el proyecto de artículo 2, porque, como se señala en el párrafo 41 del comentario a ese artículo, desde la aprobación del Estatuto de Roma se han producido diversos avances en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional que reflejan la manera actual de interpretar el término “género”.

99. La iniciativa de concertar un nuevo tratado multilateral sobre asistencia judicial recíproca y extradición para el enjuiciamiento en el plano nacional de los crímenes internacionales más graves tiene por fin ofrecer un marco exhaustivo y moderno para el enjuiciamiento nacional de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La iniciativa y el proyecto de artículos persiguen el mismo objetivo, acabar con la impunidad de los delitos más graves, pero difieren en lo que respecta a su alcance *ratione materiae* y a su enfoque. El proyecto de artículos es exhaustivo y pretende abarcar un amplio abanico de conceptos, incluidas la asistencia judicial recíproca, la extradición, la prevención, la responsabilidad de los Estados y la reparación para las víctimas respecto de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, se trata de dos esfuerzos complementarios, que deberían continuar desarrollándose en paralelo.

100. **La Sra. Che Meh** (Malasia) dice que Malasia ha tomado nota de la decisión de la Comisión de recomendar a la Asamblea General el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, y apoya la elaboración de una convención basada en el proyecto de artículos, bien por la Asamblea General, o bien por una conferencia internacional de plenipotenciarios.

101. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, la oradora estima reseñable que los debates hayan progresado desde la determinación de los criterios para la identificación de las normas de *ius cogens* hasta la consideración de la validez de los instrumentos internacionales que están en oposición con dichas normas. En cuanto a si un Estado que no es parte en un tratado puede anularlo por entrar en conflicto con una norma de *ius cogens*, Malasia considera que, en el contexto general del derecho convencional, solo los Estados que son partes en un tratado deberían poder determinar que el tratado es nulo por entrar en conflicto con una norma de *ius cogens*.

102. Si bien el Relator Especial es digno de elogio por la calidad de su informe, muchas de las conclusiones que propone tienen sus raíces en la doctrina, y no en la práctica internacional. Malasia querría ver un análisis más detallado de la metodología utilizada para la identificación de las normas imperativas y, en particular, un ejemplo de una norma imperativa de derecho internacional general que haya sido modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter, como prevé el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

103. **La Sra. Dramova** (Bulgaria) dice que Bulgaria reitera su voluntad de acabar con la impunidad y fortalecer el marco jurídico internacional para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los crímenes internacionales. Por lo tanto, Bulgaria acoge con satisfacción la aprobación por la Comisión del proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, y celebra que la Comisión haya hecho un esfuerzo para seguir ajustándose al marco jurídico vigente incorporando al proyecto de artículos la definición de crímenes de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e inspirándose en tratados multilaterales y bilaterales, en particular en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

104. La delegación de Bulgaria se alegra también de que la Comisión deje claro en el proyecto de artículos que deben respetarse los derechos humanos de los presuntos infractores. Mediante la incorporación de disposiciones relativas a una amplia asistencia judicial recíproca y al principio *aut dedere aut iudicare* en el proyecto de artículos, la Comisión también reafirma que no hay ningún refugio para quienes cometen los crímenes más graves de trascendencia internacional. Como participante en la iniciativa para concertar un nuevo tratado multilateral sobre asistencia judicial recíproca y extradición para el enjuiciamiento en el plano nacional de los crímenes internacionales más graves, Bulgaria cree que el proyecto de artículos y la iniciativa son dos proyectos diferentes pero complementarios que aportarán valor añadido al marco jurídico internacional. La delegación de Bulgaria apoya la elaboración de una convención general sobre la base del proyecto de artículos, preferiblemente por una conferencia internacional de plenipotenciarios.

105. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, la oradora dice que Bulgaria acoge con agrado el enfoque constructivo seguido por el Relator Especial y sus esfuerzos para lograr un equilibrio entre la práctica de los Estados y la teoría. La Comisión debería asegurarse de que el proyecto de conclusiones aprobado sobre este tema esté en consonancia con la práctica previa y con la redacción utilizada en sus documentos anteriores, en particular en lo que respecta a la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En el proyecto de conclusiones aprobado en primera lectura, la Comisión estableció una clara distinción entre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), las normas consuetudinarias de derecho internacional y las obligaciones creadas por actos unilaterales de los Estados, y determinó sus respectivas posiciones jerárquicas en caso de conflicto entre ellas.

En lo que respecta a la lista ilustrativa de normas de *ius cogens* que figura como anexo del proyecto de conclusiones, la delegación de Bulgaria considera necesario un análisis más exhaustivo del carácter de las normas. La delegación acoge con beneplácito los esfuerzos de la Comisión por aclarar la controversia teórica sobre el concepto de *ius cogens* regional.

106. **La Sra. Durney** (Chile), respecto al tema “Crímenes de lesa humanidad”, expresa la satisfacción de su delegación con el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad aprobado por la Comisión en segunda lectura. En la elaboración del proyecto de artículos, la Comisión ha tratado de conciliar dos objetivos: ayudar a prevenir la comisión de crímenes de lesa humanidad y luchar contra su impunidad, por una parte, y redactar disposiciones que sean eficaces y susceptibles de generar el apoyo de los Estados, como base para una posible convención futura, por otra. Ciertamente, el proyecto de artículos eventualmente obligaría a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir estos ilícitos y sancionarlos. El texto logra un equilibrio adecuado entre la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y refleja adecuadamente las obligaciones básicas que derivan de la prohibición consuetudinaria de los crímenes de lesa humanidad, incluido el deber de todos los Estados de prevenirlos y sancionarlos.

107. La definición de “crimen de lesa humanidad” recogida en el proyecto de artículo 2 replica casi en su totalidad la definición correspondiente del Estatuto de Roma, una definición comúnmente aceptada por los Estados y los tribunales internacionales. El proyecto de artículos también propone nuevas obligaciones, que en gran medida responden al objetivo de fomentar la cooperación horizontal entre Estados para la investigación y sanción de estos crímenes. Un ejemplo es la obligación de los Estados que sean partes en un futuro tratado relativo a este tema de establecer la jurisdicción universal respecto de los crímenes de lesa humanidad cuando el presunto responsable se encuentre en su territorio y la de facilitar su extradición.

108. Aunque el proyecto de artículos no afectaría en absoluto a las obligaciones de los Estados partes en el Estatuto de Roma, contiene obligaciones que contribuirán a fortalecer las capacidades de cada Estado para perseguir penalmente a los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Ello fomentaría la aplicación del principio de complementariedad, uno de los factores que condiciona el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional. La implementación adecuada del proyecto de artículos

permitiría disminuir el rango de situaciones susceptibles de requerir la intervención de la Corte.

109. En cuanto a la definición que establece el proyecto de artículo 2, párrafo 2 i), relativa a la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad, la delegación de Chile considera que la frase “con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado” debería haber sido reformulada. En la declaración escrita de la oradora, que se puede consultar en el portal PaperSmart, figuran explicaciones más detalladas de la posición de su delegación a este respecto, así como sobre otros asuntos. Aunque el texto del proyecto de artículo 10, relativo al principio *aut dedere aut iudicare*, es bastante satisfactorio, debería dejar más claro que la obligación que establece no se tendrá por cumplida cuando se extradite a la persona por un ilícito distinto a los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, un hurto.

110. El proyecto de artículo 12 (Víctimas, testigos y otras personas) es una disposición equilibrada y que tiene un alcance razonable. La delegación de Chile celebra la inclusión del párrafo 3 de ese artículo, que alude a la cuestión del derecho de la víctima de un crimen de lesa humanidad a obtener una reparación, garantizando así la restauración del estado de derecho y la prevención de la reiteración de estos crímenes. También celebra que se haya precisado el texto en la segunda lectura, en lo que respecta a qué Estados se encuentran obligados a proporcionar las reparaciones.

111. Chile apoya la recomendación de la Comisión de que se elabore una convención basada en el proyecto de artículos, dado que dicha convención tendría un importante rol en el fortalecimiento del derecho penal internacional y para hacer efectiva la responsabilidad individual de quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Aunque se han establecido tribunales penales internacionales para enjuiciar determinados crímenes, como el genocidio y los crímenes de guerra, todavía no existe un tratado relativo a los crímenes de lesa humanidad. La elaboración de una convención sobre esta materia contribuiría a que los Estados adoptaran medidas idóneas para prevenir y sancionar dichos crímenes. Dado que una convención sobre esta materia solo será vinculante para aquellos Estados que lleguen a ser partes en ella, la delegación de Chile confía en que los Estados que no deseen ser partes en ella no impidan que se forme el consenso necesario para adoptar una resolución en este sentido.

112. El proyecto de artículos y la iniciativa de elaborar un tratado multilateral de asistencia judicial recíproca y extradición deberían ser iniciativas complementarias. La iniciativa solo debería contener obligaciones propias

de un tratado de asistencia judicial recíproca, que establezcan un sólido marco procedimental destinado a facilitar la investigación y enjuiciamiento de los más graves crímenes de derecho internacional. Ello ciertamente lograría que ambos proyectos tuvieran distintos ámbitos de aplicación, evitando riesgos de fragmentación o contradicciones.

113. En cuanto al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) y el proyecto de conclusiones aprobado por la Comisión en primera lectura, la oradora dice que la inclusión de la lista ilustrativa y no exhaustiva de normas imperativas en el anexo del proyecto de conclusiones puede resultar útil para determinar qué tipo de normas cumplirían con los criterios establecidos por el proyecto de conclusión 4. Sin embargo, dicha lista debe ser compatible con la naturaleza metodológica del proyecto de conclusiones, que en su segunda parte regula la identificación de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*).

114. La Comisión señala en el proyecto de conclusión 23 que las normas que figuran en la lista no exhaustiva han sido reconocidas previamente por ella como normas imperativas de derecho internacional general, pero no indica de qué manera se cumplen los requisitos que la propia Comisión ha formulado para justificar esa afirmación. Para evitar esa contradicción, y poder conservar la lista, el párrafo que encabeza el anexo debería ser modificado en términos que no le exijan a la Comisión examinar cada uno de los criterios individualizados en la segunda parte del proyecto. Por ello, sería conveniente que el párrafo introductorio se iniciara con una de las frases empleadas en el párrafo 374 del informe del Grupo de Estudio de la Comisión sobre la fragmentación del derecho internacional (A/CN.4/L.682), que dice: “En general, entre las reglas más frecuentemente citadas para el rango de *ius cogens*, figuran las siguientes:”.

115. Por último, la delegación de Chile ha señalado en anteriores ocasiones que la oposición de una norma consuetudinaria internacional a una norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*) debe tener por efecto la invalidez de la primera; que si todas las partes consienten en ello, es posible modificar las disposiciones del tratado nulo *ab initio* para compatibilizarlas con una norma de *ius cogens*; y que la nulidad por *ius cogens* sobreviniente no tiene efecto retroactivo sobre la validez del tratado, lo cual es ahora correctamente mencionado en el comentario al proyecto de conclusión 10.

116. En cuanto al tema de la aplicación provisional de los tratados y el proyecto de directrices sobre la

aplicación provisional de los tratados aprobado por el Comité de Redacción en primera lectura en el 70º período de sesiones de la Comisión, la oradora señala que sería conveniente clarificar si es que los actos ejecutados por los Estados en aplicación provisional de un tratado podrían ser tenidos en cuenta como un tipo de “práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”, en los términos del artículo 31, párrafo 3, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Aunque durante la aplicación provisional todavía no cabe referirse a las “partes” en un acuerdo, los Estados que opten por este régimen de aplicación podrían manifestar claramente a través de su conducta el sentido que asignan a las disposiciones del tratado, contribuyendo a su interpretación.

117. El proyecto de directriz 4, apartado b), menciona que la aplicación provisional puede ser convenida a través de una resolución aprobada por una organización internacional o una conferencia intergubernamental. La delegación de Chile considera que las referidas resoluciones sí podrían ser un medio para acordar la aplicación provisional, pero solo en la medida en que un tratado u otro acuerdo previo entre las partes involucradas les reconociera este efecto.

118. Con respecto a los proyectos de cláusulas modelo sobre la aplicación provisional de los tratados que propone el Relator Especial, la delegación de Chile estima que la redacción de la cláusula modelo 1, párrafo 1, puede ser mejorada. El párrafo dice así: “El presente Tratado [El presente artículo/Los presentes artículos ...] se aplicará[n] provisionalmente a partir de la fecha de la firma [o a partir de la fecha X], a menos que un Estado [una organización internacional] notifique al otro Estado [a la otra organización internacional] [al Depositario] en el momento de la firma [o en cualquier otro momento convenido] que no consiente en quedar obligado por dicha aplicación provisional”. La expresión “a menos” parecería indicar que basta con que un Estado notifique su voluntad de no someterse a este régimen para que la aplicación provisional no tenga lugar entre ninguno de los sujetos interesados. Para evitar este inconveniente, podría insertarse un nuevo párrafo en esta cláusula modelo, cuyos términos podrían ser los siguientes: “Lo dispuesto en el párrafo 1 no regirá para aquel Estado [organización internacional] que notifique al otro Estado [a la otra organización internacional] [al Depositario], en el momento de la firma [o en cualquier otro momento convenido], que no consiente en quedar obligado por dicha aplicación provisional”. Una precisión similar debería efectuarse respecto del párrafo 2 del proyecto de cláusula modelo.

119. Respecto de la cláusula modelo 2, que indica que un tratado podría ser aplicado provisionalmente de conformidad con las disposiciones de un acuerdo distinto a tal efecto, sería interesante prever el caso en que los Estados partes en el acuerdo adicional al que se refiere fueran distintos a los Estados firmantes del tratado que se aplicará provisionalmente. La delegación de Chile valora la propuesta de cláusula modelo 5, la cual permite a los Estados notificar a las demás partes posibles limitaciones a la aplicación provisional de un tratado emanadas de su derecho interno. La inclusión de esta cláusula permite enfrentar de manera pragmática y realista la diversidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo. Sin embargo, una notificación de esta naturaleza solo será eficaz en los casos en que se haya convenido aplicar provisionalmente un tratado con sujeción al derecho interno, posibilidad que recoge el proyecto de directriz 12 (Acuerdo relativo a la aplicación provisional con las limitaciones derivadas del derecho interno de los Estados y de las reglas de las organizaciones internacionales). Fuera de estos casos, la notificación prevista en el proyecto de cláusula modelo 5 no sería admisible, y regiría lo dispuesto en los proyectos de directriz 8 y 10.

120. Chile saluda la inclusión del tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional” en el programa de trabajo de la Comisión. Además, acoge favorablemente que la Comisión haya decidido incluir en su programa de trabajo a largo plazo el tema “Reparación a las personas físicas por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario”, dado que la Comisión decidió no abordar esta materia en sus artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, sino incluir solo una cláusula “sin perjuicio” al efecto en su artículo 33, párrafo 2. Chile espera que tanto este tema como el tema “La jurisdicción penal universal” puedan ser incluidos en el actual programa de trabajo de la Comisión en el futuro próximo.

121. **El Sr. Rabe** (Côte d’Ivoire) dice que Côte d’Ivoire acoge con agrado todos los temas tratados por la Comisión en su 71^{er} período de sesiones, que representan, sin excepción, las preocupaciones que la comunidad internacional comparte actualmente y a los que habría que dar una respuesta satisfactoria. También le satisface que la Comisión haya decidido incluir en su programa de trabajo a largo plazo el tema “Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar”, dados los efectos que este tipo de delitos tienen en la paz y la seguridad nacionales, regionales e internacionales, en el desarrollo de los Estados, en los

intereses económicos nacionales y en la vida de las personas. La piratería está resurgiendo en África, en particular frente a las costas de Somalia y en el golfo de Guinea y el golfo de Adén. Las dimensiones jurídica, política, diplomática, militar y estratégica de la piratería deben examinarse de manera detenida para mantener la paz y la seguridad en el mar.

122. Côte d’Ivoire, un Estado ribereño con varios puertos importantes, ha sufrido actos de piratería y robos a mano armada en sus propias aguas. Para impedir nuevos ataques, el Gobierno reformó el Código Marítimo con el fin de armonizarlo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en especial las disposiciones relativas a la piratería. El nuevo Código, aprobado en 2017, se basa principalmente en las definiciones establecidas en la Convención. El Gobierno ha mejorado también el marco legislativo y de política, ha fortalecido la capacidad de la fuerza naval del país y ha impulsado la adopción y aplicación de una estrategia marítima integrada por parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. El objetivo de la estrategia es que los Estados miembros de esa Comunidad puedan luchar mejor contra la piratería aunando sus esfuerzos y reforzando la cooperación.

123. **La Sra. Zolotarova** (Ucrania) dice que Ucrania celebra que la Comisión haya aprobado el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, y ha presentado comentarios escritos y realizado propuestas sobre la definición de esos crímenes. Ucrania está decidida a acabar con la impunidad y a asegurar que los autores de los crímenes más graves sean sometidos a la acción de la justicia. Por lo tanto, apoya la elaboración de una convención sobre la base del proyecto de artículos.

124. Ucrania acoge con satisfacción la aprobación por la Comisión, en primera lectura, del proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. El tema es especialmente importante para el país porque la agresión militar extranjera que está sufriendo ha causado considerables daños ambientales que afectan a los ecosistemas y a la salud pública. Las regiones afectadas por el conflicto no solo se enfrentan al riesgo de una emergencia ambiental, sino también a una contaminación duradera. El compromiso de Ucrania con la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados queda de manifiesto en las resoluciones que patrocinó en los períodos de sesiones segundo y tercero de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Ambas resoluciones hacían referencia al trabajo de la Comisión en materia de protección del medio ambiente en relación con los

conflictos armados, y Ucrania las considera complementarias a la labor de la Comisión.

125. A Ucrania le complace que el proyecto de principio 8 (Desplazamientos humanos) incluya un llamamiento a adoptar medidas apropiadas para prevenir y mitigar la degradación ambiental en las zonas donde se encuentren personas desplazadas por un conflicto armado. Sin embargo, las áreas geográficas a las que se hace referencia en el principio deberían ampliarse para incluir las zonas que cruzan las personas desplazadas, ya que estos territorios también necesitan protección. Ucrania está de acuerdo con la decisión de la Relatora Especial de basar el proyecto de principio 9 (Responsabilidad del Estado) en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Asimismo, le complace que el proyecto de principio incluya una referencia a “los daños al medio ambiente en sí mismo” como algo que se puede y se debe reparar.

126. Sin embargo, a Ucrania le preocupa que el proyecto de principios no aborde plenamente la responsabilidad en sentido general y la responsabilidad civil de los grupos armados no estatales por los daños causados al medio ambiente como consecuencia de conflictos armados. Aunque Ucrania acoge con satisfacción los proyectos de principio 10 y 11, relativos a la debida diligencia corporativa y la responsabilidad civil corporativa, respectivamente, estos principios no deberían centrarse exclusivamente en las corporaciones y otras empresas, sino también en los actores no estatales. Muchos Estados han formulado sugerencias similares en otras ocasiones. Por lo tanto, la delegación de Ucrania es partidaria de que se prepare un proyecto de principio sobre la responsabilidad penal de miembros de grupos armados no estatales por daños ambientales antes de que se proceda a la segunda lectura del proyecto de principios.

127. A Ucrania le complace que el proyecto de principio 18 reafirme la aplicabilidad de la prohibición del pillaje a los recursos naturales; este principio tiene precedentes. La delegación de Ucrania acoge también con satisfacción la propuesta de la Relatora Especial de vincular el proyecto de principio 18 con el proyecto de principio 21 [20], relativo a la utilización sostenible de los recursos naturales en situaciones de ocupación.

128. Ucrania considera que el tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados no solo pertenece a la esfera ambiental, sino también a la humanitaria, dada la relación que existe entre la calidad ambiental y la salud humana. Las consecuencias humanitarias de los daños ambientales pueden ser duraderas y graves, y afectar a muchos ámbitos, desde

la salud pública hasta los medios de vida de las personas. La delegación de Ucrania se alegra, por tanto, de que se haya incluido el proyecto de principio 26, sobre socorro y asistencia. Está de acuerdo con la Comisión en que determinar la responsabilidad por los daños ambientales puede ser complicado, especialmente cuando los daños sean consecuencia de una cadena de acontecimientos y no de un solo acto.

129. Habida cuenta de la importancia de la asistencia humanitaria y ambiental para la recuperación posconflicto y la consolidación de la paz, Ucrania vería con agrado que, en el comentario al proyecto de principio 26, se profundizara en el análisis de las “formas de socorro o asistencia” a las que se refiere dicho principio. La delegación de Ucrania también se pregunta si la frase “se alienta a los Estados a que adopten medidas apropiadas” es suficientemente contundente. La oradora recuerda que la redacción inicial del proyecto de principio propuesto era “los Estados deberán adoptar medidas apropiadas”. No obstante, una vez concluido, el proyecto de principios establecerá un fundamento normativo sólido, que debería haberse adoptado hace mucho tiempo, para mejorar la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.